



## **G20: Porqué la sociedad civil debe tener un sitio en la mesa**

*por Inés M. Pousadela*

Toda vez que el G20, el club de los países más ricos y poderosos del mundo, se reúna en Argentina durante 2018, en preparación de su reunión cumbre de fines de noviembre, el importante papel que desempeña la sociedad civil en la creación de sociedades pacíficas y saludables debe estar en la agenda. En tanto que anfitrión de la cumbre de este año, Argentina tiene la oportunidad de promover una mejor comprensión y reconocimiento de las razones por las cuales es crucial habilitar la labor de la sociedad civil y abrir más espacios para la sociedad civil en los procesos del G20.

### ***Condiciones difíciles para la sociedad civil***

No son tiempos fáciles para la sociedad civil, y esto debería preocuparnos a todos. Las dificultades que enfrenta la sociedad civil son similares a, y tienen las mismas raíces que, las que está experimentando la democracia.

En su más reciente [Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil](#), CIVICUS observa con preocupación que los espacios de acción democrática se están reduciendo. El [CIVICUS Monitor](#), nuestra herramienta online de monitoreo, registró durante 2017 problemas sistémicos en el espacio cívico - el espacio en el cual las personas pueden organizarse, movilizarse y comunicarse libremente unas con otras para dar forma a las estructuras políticas y sociales que las rodean - en 109 países: más de la mitad de los países del mundo. Tan solo el 4% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico es abierto, es decir, donde existen las condiciones para ejercitar plenamente las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión que constituyen los cimientos del espacio cívico. Lo que es aún más preocupante es que estamos viendo ataques graves contra el espacio cívico incluso en países donde la discusión en torno de la democracia se daba por saldada. En otras palabras: constatamos que los derechos no pueden darse por ganados de una vez y para siempre; son, en cambio, un permanente campo de batalla.

Y esa es precisamente la batalla de la sociedad civil, movilizada ante todo para preservar las condiciones de su propia existencia, que son también las condiciones de un espacio cívico democrático y pluralista.

### ***El valor de la sociedad civil***

Es imposible sobreestimar la contribución de la sociedad civil al desarrollo de la arquitectura global de derechos humanos – instituciones, agencias, tratados, acuerdos, normas, estándares – y a su funcionamiento. En los años '90, un ex director del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [estimaba](#) que el 85% de la información con que trabajaba la institución procedía de la sociedad civil. Sin el trabajo de la sociedad civil, ¿quién llamaría a los estados a rendir cuentas de sus actos? De más está decir que los mecanismos de derechos humanos existentes son deficientes e insuficientes, pero ¿quién sino la sociedad civil batalla sin pausa para dotarlos de uñas y dientes?

Tal como lo hiciera notar el gran filósofo y sociólogo contemporáneo [Jürgen Habermas](#), los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de funcionar como sensores de situaciones críticas. Anclados en el mundo de la vida, son más sensibles que los sistemas político y administrativo para percibir nuevos desafíos, identificarlos y proveer marcos interpretativos para ellos. Fueron las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales los que llevaron a la agenda pública todos los grandes temas de las últimas décadas, desde el peligro de holocausto nuclear hasta la amenaza ecológica, pasando por las inequidades de género, las disfuncionalidades de la globalización y las complejidades del multiculturalismo. Dedicados activistas y organizaciones de la sociedad civil han contribuido a marcar el rumbo en estos temas. Vimos un ejemplo de ello el año pasado, cuando se aprobó el tratado sobre armas nucleares, por el que la coalición de sociedad civil ICAN recibió el Premio Nobel de la Paz; y lo estamos viendo actualmente bajo la forma de esfuerzos para desarrollar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

Los actores de la sociedad civil desempeñan muy bien una serie de funciones, y en el ejercicio de algunas de ellas son verdaderamente insustituibles. Ante todo, dado que ni el más democrático de los Estados está suficientemente equipado para controlarse a sí mismo, la sociedad civil es guardiana de derechos y libertades; de hecho, su existencia se remonta a los orígenes mismos del moderno Estado liberal, un Estado que encontró en ella los límites al ejercicio de su propio poder. La sociedad civil impone límites y exige explicaciones: llama a los gobiernos a rendir cuentas. No solamente monitorea el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, reporta violaciones de derechos, asiste a las víctimas y exige reparaciones; también controla a la administración pública en el día a día para exigirle resultados que beneficien a los ciudadanos. En ese sentido, trata de ayudar al Estado a dar lo mejor de sí mismo.

Efectivamente, no somos solamente perros guardianes. Somos muchos, y cada uno de nosotros se especializa en algo. Entre nosotros hay expertos capaces de aportar a la política pública, cerebros innovadores ideando soluciones para los desafíos globales – la desigualdad, el cambio climático, el conflicto violento - y comunicadores capaces de traducir la jerga técnica al lenguaje llano del ciudadano de a pie, así como de traer la perspectiva de éste a los foros de toma de decisiones. Los gobiernos y los organismos multilaterales, incluido el G20, se beneficiarían si hicieran uso de nuestra capacidad instalada y la información que producimos, del modo en que ya lo hace el sistema universal de derechos humanos.

Obviamente, la sociedad civil no podría desempeñar todos estos roles en soledad; una de sus grandes tareas es formar redes y buscar aliados en sectores que tengan el poder – la capacidad para tomar decisiones vinculantes – que a nosotros nos falta y que, si bien por sí mismos no encabezarán el cambio que buscamos, están en posición de ayudarnos a lograrlo.

Las instancias de colaboración entre gobiernos y sociedad civil se han multiplicado en años recientes; sin embargo, en muchas de ellas la promesa con que somos convocados es decepcionada, ya que nuestros aportes a menudo no se traducen en una diferencia en la toma de decisiones. El estándar de co-creación que promueven iniciativas como la Alianza para el Gobierno Abierto está lejos de ser una práctica corriente en los espacios nacionales - y en el nivel global, el panorama no es mucho mejor.

### ***La sociedad civil y el G20***

Observamos con alarma la erosión de las instituciones multilaterales. Cuando plantean preocupaciones de derechos humanos, los organismos multilaterales son, cada vez más, atacados como propagadores de valores cosmopolitas y estándares utópicos, y como obstáculos para la persecución desembozada del autointerés nacional. A medida que estados poderosos reniegan de sus obligaciones y las desfinancian, las instituciones internacionales (y notablemente las agencias de la ONU) se vuelcan a las alianzas con el sector privado. Así, cuando la sociedad civil es convocada, difícilmente logra un acceso comparable al que se ofrece a los representantes del sector privado.

Estos desafíos son claramente visibles en el G20: pese a todo lo que tenemos para ofrecer, no nos sentamos a la misma mesa; somos tratados como socios de segunda categoría. Nuestros argumentos en temas importantes – tales como la necesidad de enfrentar la desigualdad y formular políticas económicas que beneficien a las mayorías en vez de a unos pocos – tienden a ser ignorados. No resulta sorprendente, entonces, que la ciudadanía, en un país tras otro, exprese desconfianza hacia unos gobiernos a los que percibe como sordos a sus reclamos, demasiado distantes de los ciudadanos, o demasiado íntimamente vinculados con estrechos intereses empresariales. En el G20 se discuten políticas que tienen un impacto enorme, a veces brutal, sobre nuestras vidas y sociedades. En tanto que sociedad civil, debería permitírse nos acercar las voces de las personas, reales y diversas, que son afectadas por las políticas públicas impulsadas desde estos foros.

Activo desde 2013, el C20 es uno de los siete grupos de afinidad del G20, destinados a establecer vínculos con actores no gubernamentales, entre los que también se cuentan empresas (B20), trabajadores (L20), centros de pensamiento (T20), actores del sistema científico (S20), mujeres (W20) y jóvenes (Y20). El C20 y sus [grupos de trabajo](#) son los principales mecanismos mediante los cuales la sociedad civil tiene la oportunidad de contribuir al G20, y los grupos de la sociedad civil los utilizan para colocar en la agenda los temas que les preocupan, incluidos algunos que tradicionalmente han sido particularmente refractarios al escrutinio público y la participación ciudadana.

Sin embargo, el balance de la participación de la sociedad civil en el G20 en general, y en los grupos de trabajo en particular, es mixto en el mejor de los casos. Consideramos un logro importante la presencia de un tema de agenda del Grupo de Trabajo sobre

Anticorrupción en torno del cual los gobiernos tratan con el sector privado y la sociedad civil en pie de igualdad. Pero se trata de la excepción más que de la regla; es necesario seguir avanzando en esa dirección.

También existen desafíos relativos al sujeto de la participación. Quienes asisten a estos foros son, en cierto modo, los privilegiados, habiendo pasado varios filtros: conseguir los recursos para asistir, lograr que sus gobiernos los dejen viajar y que el gobierno anfitrión les permita ingresar al país, y contar con cierta seguridad de que no serán víctimas de represalias al regresar. Muchos son excluidos porque trabajan en las condiciones de un espacio cívico fuertemente restringido. De ahí la necesidad de que la sociedad civil trabaje en redes amplias y diversas, de modo de estar en condiciones de transmitir las voces ausentes de los menos privilegiados.

Lamentablemente, algunos estados claramente ven a la sociedad civil como una amenaza a excluir. Seguramente lo sea para aquellos gobiernos que ven en los derechos un obstáculo a sortear más que un compromiso a ejecutar o una promesa por cumplir. Pero para los gobiernos que buscan una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo, la sociedad civil ofrece una auténtica oportunidad.

Dados los monumentales desafíos globales que enfrentamos, la voz de la sociedad civil es hoy más necesaria que nunca. Trabajar juntos no es una opción; es un imperativo de supervivencia. El mundo sería un lugar muy distinto, mucho más cruel e inhóspito de lo que es hoy, si la sociedad civil no hubiera hecho o no estuviera haciendo su trabajo. Y no podemos permitir que ello ocurra, si es que queremos dejarles este planeta a nuestros hijos.

Cuando el G20 se reúna en Buenos Aires, el mundo esperará que Argentina exhiba su liderazgo en la Presidencia del G20. Argentina debería liderar con el ejemplo y demostrar su compromiso con la ampliación de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. El G20, con Argentina al frente, tiene ahora una real oportunidad para trabajar con sus ciudadanos y con los miembros de la sociedad civil global que pronto se darán cita en Buenos Aires, o estarán observando atentamente a la distancia.